



DOI: <https://doi.org/10.23857/dc.v11i2.4328>

Ciencias Sociales y Políticas
Artículo de Investigación

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

The principle of legality and its impact on the efficiency of public administration: A legal analysis of Ecuadorian regulations

O princípio da legalidade e seu impacto na eficiência da administração pública: uma análise jurídica da regulamentação equatoriana

Vanessa Lizeth Londoño-Choez ^I
abgvannessalondono@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-0918-6951>

Kerly Patricia Alarcón-Parra ^{II}
kalarcon@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0003-8185-367X>

Correspondencia: abgvannessalondono@gmail.com

***Recibido:** 04 de marzo de 2025 ***Aceptado:** 24 de marzo de 2025 * **Publicado:** 05 de abril de 2025

I. Abogada, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP) hace constar que:

El artículo científico:

“Estrategia educativa para potenciar el aprendizaje inclusivo en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales”

De autoría:

**Segress García Hevia, Karen Sulay González Ramírez, Jefferson Andrés
Tayupanda Tayupanda, Marbel Guilarte Legrá**

Habiéndose procedido a su revisión y analizados los criterios de evaluación realizados por lectores pares expertos (externos) vinculados al área de experticia del artículo presentado, ajustándose el mismo a las normas que comprenden el proceso editorial, se da por aceptado la publicación en el **Vol. 11, No 2, Abril-Junio 2025**, de la revista Dominio de las Ciencias, con ISSN 2477-8818, indexada y registrada en las siguientes bases de datos y repositorios: **Clase, Erihplus, Latindex, MIAR, I2OR, Google Académico, OAJI, LatAm Studies, SIS, SJIF, ESJI, Issuu, Scribd, Calaméo e Internet Archive, WorldCat, Base.**

Y para que así conste, firmo la presente en la ciudad de Manta, a los 19 días del mes de marzo del año 2025.



**Abg. Néstor Darío Suárez Montes
DIRECTOR**

Resumen

Con el propósito de garantizar la eficacia y eficiencia en la administración pública, se establecen principios, derechos y obligaciones para los servidores públicos. A pesar de ello, persisten desafíos en su implementación, como la falta de capacitación y recursos. El principio de juridicidad, que exige que la administración pública actúe conforme a la legalidad, es fundamental. Sin embargo, la implementación de este principio enfrenta diversos desafíos en Ecuador, como la superposición normativa, la falta de claridad en ciertas disposiciones legales, la burocracia excesiva y la insuficiente capacitación de los servidores públicos. Estas problemáticas pueden generar ineficiencia en la toma de decisiones y en la prestación de servicios, afectando la confianza ciudadana en las instituciones. El presente estudio realiza un análisis jurídico de la normativa ecuatoriana en relación con el principio de juridicidad, considerando las disposiciones clave de la Constitución, el Código Orgánico Administrativo (COA) y la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). A partir de una revisión documental y la percepción de jueces y profesionales del derecho. Se concluye que fortalecer el principio de juridicidad requiere reformas normativas que eliminen contradicciones, digitalización de procesos administrativos para reducir la burocracia y capacitación continua de los funcionarios públicos. Estas estrategias contribuirían a una administración más ágil, efectiva y alineada con los principios del Estado de derecho.

Palabras clave: Administración pública; derecho administrativo; legalidad; principio de juridicidad; seguridad jurídica.

Abstract

To ensure effectiveness and efficiency in public administration, principles, rights, and obligations for public servants are established. Despite this, challenges persist in their implementation, such as a lack of training and resources. The principle of legality, which requires public administration to act in accordance with the law, is fundamental. However, the implementation of this principle faces various challenges in Ecuador, such as regulatory overlap, a lack of clarity in certain legal provisions, excessive bureaucracy, and insufficient training for public servants. These problems can lead to

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

inefficiency in decision-making and service delivery, undermining citizen trust in institutions. This study conducts a legal analysis of Ecuadorian regulations in relation to the principle of legality, considering key provisions of the Constitution, the Organic Administrative Code (COA), and the Organic Law of Public Service (LOSEP). Based on a documentary review and the perceptions of judges and legal professionals, it is concluded that strengthening the principle of legality requires regulatory reforms that eliminate contradictions, digitization of administrative processes to reduce bureaucracy, and ongoing training for public officials. These strategies would contribute to a more agile and effective administration aligned with the principles of the rule of law.

Keywords: Public administration; administrative law; legality; principle of legality; legal certainty.

Resumo

Com o objetivo de garantir eficácia e eficiência na administração pública, são estabelecidos princípios, direitos e obrigações para os servidores públicos. Apesar disso, persistem desafios na sua implementação, como a falta de formação e de recursos. O princípio da legalidade, que exige que a administração pública atue de acordo com a lei, é fundamental. No entanto, a implementação deste princípio enfrenta vários desafios no Equador, tais como sobreposição regulamentar, falta de clareza em certas disposições legais, burocracia excessiva e formação insuficiente dos funcionários públicos. Estes problemas podem gerar ineficiência na tomada de decisões e na prestação de serviços, afetando a confiança dos cidadãos nas instituições. O presente estudo realiza uma análise jurídica da regulamentação equatoriana em relação ao princípio da legalidade, considerando as principais disposições da Constituição, do Código Administrativo Orgânico (COA) e da Lei Orgânica do Serviço Público (LOSEP). Baseado em revisão documental e na percepção de juízes e profissionais do direito. Conclui-se que o fortalecimento do princípio da legalidade requer reformas regulatórias que eliminem contradições, digitalização dos processos administrativos para reduzir a burocracia e formação contínua dos funcionários públicos. Estas estratégias contribuiriam para uma administração mais ágil e eficaz, alinhada com os princípios do Estado de direito.

Palavras-chave: Administração pública; direito administrativo; legalidade; princípio da legalidade; segurança jurídica.

Introducción

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

El principio de juridicidad constituye un pilar esencial en el funcionamiento de la administración pública, al establecer que todas las acciones y decisiones de las entidades estatales deben ajustarse estrictamente al marco normativo vigente. Este principio busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, preservar el Estado de derecho y promover una gestión pública que sea transparente, eficiente y responsable. En el contexto ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador otorga al principio de juridicidad un carácter vinculante para todas las instituciones públicas, configurándolo como un mandato indispensable para la legalidad y legitimidad del ejercicio de la función pública.

Sin embargo, la aplicación práctica de este principio enfrenta desafíos significativos que impactan la eficiencia de la administración pública. Entre estos retos se encuentran la superposición y contradicción normativa, los vacíos legales, la burocracia excesiva y la falta de formación especializada de los servidores públicos. A esto se suman problemas estructurales como la corrupción, la discrecionalidad mal utilizada y la insuficiencia de mecanismos de supervisión y control, factores que limitan el alcance real del principio de juridicidad y obstaculizan la prestación ágil y efectiva de servicios a la ciudadanía (Reyna, 2023).

En este escenario, resulta crucial reflexionar sobre cómo el principio de juridicidad puede ser aplicado de manera que no solo garantice el cumplimiento de la normativa, sino que también contribuya a optimizar los procesos administrativos y a consolidar una administración pública orientada al bienestar colectivo. Este artículo busca ofrecer un análisis jurídico-crítico de la relación entre el principio de juridicidad y la eficiencia administrativa en el Ecuador, explorando el marco legal vigente y su aplicación en la práctica. Para ello, se estudiarán disposiciones clave de la Constitución, el Código Orgánico Administrativo (COA), la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), y otras normativas relevantes.

Adicionalmente, se abordará el rol de la juridicidad como una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas. En un entorno marcado por demandas crecientes de transparencia y eficiencia, resulta imperativo diseñar estrategias que permitan compatibilizar la observancia de las normas legales con la necesidad de garantizar un funcionamiento ágil, eficaz y orientado a resultados. Este enfoque se complementará con propuestas para fomentar la capacitación técnica y jurídica de los servidores públicos, simplificar procedimientos administrativos, fortalecer los mecanismos de supervisión y promover la innovación normativa (Haro et al., 2021).

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

Al analizar el principio de juridicidad en el contexto ecuatoriano, este estudio contribuye al debate sobre cómo alcanzar una administración pública más eficiente, justa y alineada con las necesidades de la sociedad. De esta forma, se aspira a consolidar un modelo de gestión pública que respete plenamente el marco jurídico, pero que también se adapte a los imperativos de un entorno dinámico y en constante transformación (Ponce & Macías, 2022). A fin de garantizar la implementación efectiva de los principios de eficacia y eficiencia en la administración pública, los distintos cuerpos normativos han incorporado, de manera explícita o implícita, una serie de principios, derechos y deberes fundamentales (Pérez, & Tamayo, 2022). No obstante, a pesar de la solidez de este marco normativo, persisten desafíos significativos en la aplicación práctica de estos principios, lo que afecta la eficiencia en el desempeño de la administración pública.

El principio de juridicidad establece que toda actuación administrativa debe alinearse con el marco legal vigente, incluyendo la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los principios generales del derecho y la jurisprudencia aplicable (Código Orgánico Administrativo, 2017). Este enfoque busca asegurar que las decisiones administrativas se adopten dentro de un marco normativo claro y coherente, garantizando la legalidad de las actuaciones y la protección de los derechos ciudadanos dentro del Estado de derecho (Rivero & Granda, 2017). No obstante, en la práctica, pueden surgir discrepancias en su interpretación y aplicación, lo que puede dar lugar a resoluciones que carecen de una base jurídica sólida. Estas inconsistencias no solo generan incertidumbre en los procedimientos administrativos, sino que también afectan la garantía de los derechos ciudadanos y pueden debilitar la confianza en las instituciones públicas (Cuenca, 2021).

Además, la falta de uniformidad en la aplicación del principio de juridicidad puede derivar en decisiones administrativas que, en lugar de fortalecer el Estado de derecho, generan inseguridad jurídica y afecta el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿Cómo influye el principio de juridicidad en la eficiencia de la administración pública en Ecuador? Este problema de investigación busca explorar cómo la interpretación y aplicación de la normativa jurídica relacionada con el principio de juridicidad incide en la eficacia y agilidad de los procesos administrativos en el contexto ecuatoriano.

Este trabajo investigativo tiene como objetivo analizar la relación entre el principio de juridicidad y la eficiencia de la administración pública en el contexto normativo ecuatoriano, con el objetivo de comprender cómo su interpretación y aplicación fortalecen el marco legal y la gestión gubernamental en el país. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: examinar jurídicamente el

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

principio de juridicidad en el derecho administrativo, resaltando su importancia para una actuación gubernamental eficiente; determinar su aplicación práctica en la administración pública ecuatoriana y evaluar su influencia en la agilidad y eficacia de los procesos administrativos; y analizar su impacto en la eficiencia administrativa a partir de la percepción de jueces y abogados en libre ejercicio, identificando obstáculos y áreas de mejora. Este análisis busca sentar las bases para una administración pública más eficiente y coherente con los valores constitucionales.

Metodología

La presente investigación adopta un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos para abordar de manera integral el tema de estudio. En la vertiente cualitativo, se utilizará un diseño narrativo de tipo documental basado en el método de análisis jurídico. Este método implica la recopilación, interpretación y análisis de documentos y fuentes de información relevantes, tales como leyes, jurisprudencia, informes, artículos académicos y otros materiales pertinentes. El objetivo principal de este enfoque será comprender la aplicación del principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública dentro del contexto normativo ecuatoriano, además de contribuir al fortalecimiento del marco legal y la gestión gubernamental en el país.

En cuanto al enfoque cuantitativo, se empleará un diseño no experimental a través de encuestas estructuradas. Este método permitirá medir numéricamente la percepción sobre la efectividad de las medidas de protección y reparación relacionadas con el principio de juridicidad. La encuesta ofrecerá una perspectiva cuantitativa de las experiencias y conocimientos de los participantes en relación con el tema de estudio.

La población de estudio estuvo conformada por un total de 20 profesionales del derecho, entre abogados y jueces con destacada experiencia en el ámbito del derecho administrativo. El muestreo se realizará por conveniencia, seleccionando a participantes con un mínimo de cinco años de experiencia en el área, cuya trayectoria profesional estuviera alineada con los objetivos de la investigación.

Para alcanzar el primer objetivo de la investigación, se llevó a cabo una revisión de la literatura jurídica y de la legislación ecuatoriana vigente. Este análisis incluyó una evaluación detallada del principio de juridicidad en el contexto del derecho administrativo, con un énfasis particular en su relevancia para garantizar una actuación gubernamental eficiente.

El segundo objetivo se centró en analizar e interpretar las características y tendencias relacionadas con la aplicación práctica del principio de juridicidad en la administración pública ecuatoriana. Para

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

este fin, se empleó la técnica de análisis de contenido temático, que permitió identificar patrones recurrentes y temas clave en la normativa y en las prácticas administrativas relevantes. Como herramienta de apoyo, se elaborarán tablas comparativas que facilitarán la organización y síntesis de la información recopilada durante el análisis.

Para complementar con los primeros dos objetivos de la investigación, se diseñó un cuestionario estructurado que será utilizado como instrumento principal para la recopilación de datos en las encuestas. Este cuestionario incluirá preguntas dirigidas a explorar las percepciones, experiencias y conocimientos de los participantes respecto al principio de juridicidad y su aplicación en la administración pública. El enfoque mixto adoptado en esta investigación permitirá integrar de manera coherente los hallazgos cualitativos y cuantitativos, proporcionando una visión amplia, fundamentada y detallada sobre el tema de estudio. Esta integración resultará trascendental para comprender las dinámicas y desafíos asociados con la aplicación del principio de juridicidad en el contexto ecuatoriano.

El principio de juridicidad en el derecho administrativo como base para una gestión gubernamental eficiente

En el ámbito del derecho administrativo, el principio de juridicidad se define como el mandato que obliga a todas las actuaciones de la administración pública a desarrollarse dentro del marco normativo establecido. Este principio, fundamentado en la Constitución ecuatoriana y en el Código Orgánico Administrativo (COA), (2017), garantiza que las decisiones y actos de las autoridades públicas estén subordinados a la ley, evitando arbitrariedades y protegiendo los derechos de los ciudadanos.

Teóricos como Kelsen, (1960), sostienen que el principio de juridicidad es una garantía fundamental del Estado de derecho, pues su cumplimiento previene la discrecionalidad excesiva y fomenta la igualdad ante la ley. Silva-Conde et al. (2024) enfatizan que este principio no debe reducirse a un mero cumplimiento formal, sino que debe orientarse hacia la justicia y el respeto por los derechos humanos. Una administración pública eficiente no solo debe alcanzar sus objetivos, sino hacerlo dentro de los límites legales y optimizando los recursos. En este sentido, Aponte (2022) destaca que la eficiencia administrativa depende de la claridad normativa, ya que esta proporciona a los funcionarios un marco de acción preciso y seguro.

En Ecuador, la Constitución de y el COA proporcionan un marco sólido para la aplicación del principio de juridicidad. Sin embargo, su implementación práctica enfrenta varios desafíos. Entre estos destacan la corrupción, las lagunas legales, la falta de capacitación técnica en los funcionarios

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

y la insuficiencia de mecanismos efectivos de control administrativo. Estas problemáticas no solo afectan la calidad de los servicios públicos, sino que también erosionan la confianza ciudadana en las instituciones (Redrobán, 2021).

La experiencia de España y México demuestra que una administración pública eficiente requiere un enfoque integral que combine normativas, herramientas operativas y educación. En España, la Ley 40/2015 ha sido clave para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza, regulando la coordinación entre administraciones y garantizando procesos accesibles para los ciudadanos. Además, iniciativas como el Portal de Transparencia refuerzan la participación ciudadana al facilitar el acceso a la información pública.

En el caso de México, los sistemas de auditoría externa, como los de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), garantizan el cumplimiento normativo al evaluar el uso de recursos públicos, detectar irregularidades y promover correctivos. Estas auditorías refuerzan la legalidad, la eficacia del gasto y la rendición de cuentas. Además, iniciativas educativas, como la capacitación de funcionarios en ética y gestión eficiente, fortalecen la profesionalización y el compromiso en la administración pública (Villalva & Becerril, 2023).

Ambos países demuestran que una administración pública eficiente no solo depende de un marco normativo robusto, sino también de la implementación de herramientas prácticas, como auditorías y plataformas digitales, y de la inversión en la formación continua de sus funcionarios. Este enfoque integral es crucial para lograr una gestión pública más transparente, responsable y orientada al servicio de los ciudadanos.

La aplicación efectiva del principio de juridicidad en la eficiencia de la administración pública

La administración pública es fundamental para el desarrollo del Estado democrático y de derecho, ya que implementa políticas públicas y atiende necesidades colectivas. En Ecuador, el principio de juridicidad, consagrado en la Constitución, garantiza que las entidades estatales actúen conforme al marco legal, protegiendo derechos fundamentales y promoviendo eficiencia, transparencia y rendición de cuentas (Subía & Mantilla, 2020). Según el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), las instituciones y funcionarios deben cumplir estrictamente la normativa vigente, asegurando que sus acciones no solo sean legales, sino también coherentes con los derechos y el bienestar ciudadano (Reyna, 2023). Este principio fortalece la confianza en las instituciones y previene la corrupción, consolidando una sociedad inclusiva y sostenible.

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

En Ecuador, el principio de juridicidad se sustenta en un robusto marco normativo. La Constitución establece la supremacía constitucional y regula el ejercicio del poder público en el Estado constitucional de derechos y justicia. El Código Orgánico Administrativo (COA) refuerza esta normativa al exigir que los actos administrativos se ajusten a la legalidad, el debido proceso y la proporcionalidad. Además, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP, 2023) y la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP, 2010) fomentan la transparencia y la ética en la conducta de los servidores públicos, asegurando que operen dentro de los límites establecidos por la ley (Aguinsaca, 2019). Este enfoque no solo optimiza la administración pública, garantizando transparencia y eficiencia operativa, sino que también fortalece la rendición de cuentas y reduce la corrupción al limitar la discrecionalidad indebida.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados, la plena aplicación del principio de juridicidad enfrenta diversos desafíos estructurales e institucionales. Entre las principales dificultades se encuentra la insuficiente capacitación de los servidores públicos, que limita su comprensión y aplicación efectiva del marco normativo vigente. Esta brecha de conocimiento, combinada con prácticas de corrupción persistentes, mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y debilita su legitimidad. Además, el exceso de burocracia continúa siendo un obstáculo significativo, ya que ralentiza la gestión administrativa, incrementa los costos operativos y fomenta prácticas irregulares que obstaculizan el desarrollo sostenible de la administración pública (Valle, 2023).

Para fortalecer el principio de juridicidad y mejorar la eficiencia administrativa en Ecuador, es esencial implementar estrategias clave, como la capacitación continua de los servidores públicos para asegurar su actuación ética y legal, la digitalización de procesos, especialmente a través de la expansión del SUT, que reduce la burocracia y mejora la trazabilidad de los trámites, y el refuerzo de la Contraloría General del Estado con mecanismos más efectivos de supervisión y sanción. Además, fomentar la participación ciudadana es crucial para garantizar que las acciones del Estado se alineen con las necesidades sociales. Estos esfuerzos, junto con la innovación tecnológica, el fortalecimiento institucional y el empoderamiento ciudadano, son fundamentales para construir una administración pública más eficiente, transparente y comprometida con los principios del Estado de derecho (Velaña, 2019).

Resultados

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

La Tabla 1 presenta los resultados de una encuesta a jueces y profesionales del derecho en Riobamba, Ecuador, sobre la aplicación del principio de juridicidad en la administración pública. Los hallazgos subrayan la importancia de una normativa más clara y de reforzar la capacitación de los servidores públicos para garantizar su adecuada implementación.

Tabla 1: Encuesta aplicada a jueces y profesionales del derecho

Preguntas	Jueces y profesionales del derecho		
	Si	No	Desconozco
1.- ¿Considera usted que el principio de juridicidad exige que las acciones de las entidades públicas se ajusten al marco normativo vigente?	100%	0%	0%
2.- ¿Cree usted que La Constitución de la República del Ecuador establece que el principio de juridicidad es vinculante para todas las instituciones públicas?	80%	20%	0%
3.- ¿La superposición normativa y los vacíos legales afectan la aplicación del principio de juridicidad?	90%	10%	0%
4.- ¿Estima que el Código Orgánico Administrativo (COA) define el principio de juridicidad como la obligación de la administración pública de respetar la Constitución, la ley y los principios establecidos??	90%	10%	0%
5.- ¿Considera que la falta de capacitación de los servidores públicos limita la eficiencia en la aplicación del principio de juridicidad?	100%	0%	0%
6.- ¿Cree usted que los actos administrativos deben ajustarse estrictamente a las normas y principios constitucionales según el principio de juridicidad?	100%	0%	0%
7.- ¿Considera que El principio de juridicidad busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos?	90%	10%	0%
8.- ¿Cree usted que El principio de juridicidad promueve la protección de los derechos ciudadanos y el respeto a los valores democráticos en todas las etapas de los procedimientos administrativos?	100%	0%	0%
9.- ¿Considera usted que El respeto a los valores democráticos es parte del alcance del principio de juridicidad?	90%	10%	0%
10.- ¿Desde su experiencia y conocimiento dentro ámbito jurídico, estima La innovación normativa puede ayudar a fortalecer la aplicación del principio de juridicidad?	90%	5%	5%

Nota. Cuestionario aplicado a jueces y profesionales del derecho con una destacada trayectoria en derecho administrativo, de la ciudad de Riobamba, Chimborazo, Ecuador

Discusión

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la
normativa Ecuatoriana

El principio de juridicidad es un eje fundamental de la administración pública, ya que establece la obligación de que todas las acciones de las entidades estatales se ajusten estrictamente al marco normativo vigente. Este principio garantiza la legalidad de las actuaciones gubernamentales y protege los derechos ciudadanos al impedir decisiones arbitrarias o discrecionales por parte de la administración pública. Los resultados de la encuesta aplicada a jueces y profesionales del derecho en Riobamba, Ecuador, reflejan un consenso significativo sobre la importancia de este principio y los desafíos que enfrenta su aplicación efectiva en el contexto normativo ecuatoriano.

Dentro de los hallazgos más relevantes del estudio se destaca que el 100% de los encuestados considera que el principio de juridicidad exige que las entidades públicas actúen conforme al ordenamiento legal. Esto refleja un alto nivel de conciencia entre los profesionales del derecho sobre la necesidad de que el sector público opere dentro del marco normativo establecido. Por otro lado, el 80% de los participantes considera que la Constitución de la República del Ecuador establece de manera clara y vinculante este principio para todas las instituciones públicas, mientras que el 20% manifestó dudas al respecto. Este hallazgo sugiere que, si bien existe un reconocimiento generalizado de su importancia, en la práctica pueden persistir discrepancias en su aplicación efectiva y en la interpretación de su obligatoriedad dentro del sistema estatal (Valencia & Cadena, 2025).

Otro punto clave identificado es el impacto la superposición normativa y los vacíos legales que afectan la aplicación del principio de juridicidad, el 90% de los encuestados respondió afirmativamente, el 10% respondió negativamente y ninguno manifestó desconocimiento. Este resultado evidencia una preocupación generalizada respecto a los problemas estructurales del sistema jurídico, los cuales dificultan una interpretación uniforme y segura del ordenamiento. La falta de coherencia normativa no solo entorpece la labor administrativa, sino que también puede derivar en decisiones arbitrarias que vulneren la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos.

En cuanto a si el Código Orgánico Administrativo (COA) define adecuadamente el principio de juridicidad como la obligación de la administración pública de respetar la Constitución, la ley y los principios establecidos, el 90% de los encuestados demostró que sí, el 10% opinó lo contrario, y nadie expresó desconocimiento. Este alto grado de conformidad sugiere que el COA es percibido como un instrumento legal sólido para orientar la actuación administrativa, aunque el desacuerdo de una minoría podría indicar la necesidad de fortalecer su aplicación práctica y su difusión entre los servidores públicos (Pomaquero et al., 2023).

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

La capacitación de los servidores públicos es otro de los factores determinantes en la aplicación del principio de juridicidad. La totalidad de los encuestados 100%, coincidió en que la falta de formación jurídica limita la eficiencia de la administración pública, lo que pone en evidencia una deficiencia estructural en el sector estatal ecuatoriano. En este sentido, la correcta aplicación del principio de juridicidad no depende únicamente de la existencia de normativas claras y accesibles, sino también del conocimiento y habilidades de los funcionarios encargados de su cumplimiento (De la Torre & Núñez, 2023).

Del mismo modo, el 100% de los participantes afirmó que los actos administrativos deben ajustarse estrictamente a las normas y principios constitucionales. La unanimidad en esta respuesta refleja una comprensión clara y compartida sobre la supremacía constitucional y la necesidad de que toda decisión administrativa se sustente en el respeto a la legalidad, la justicia y los derechos fundamentales, evitando así desviaciones de poder o abusos de autoridad (Morales & Tobar, 2020).

Al consultar si el principio de juridicidad busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, el 90% respondió afirmativamente, el 10% negativamente y ninguno indicó desconocimiento. Este resultado destaca que una amplia mayoría reconoce el carácter garantista de este principio, el cual no se limita al cumplimiento formal de la ley, sino que actúa como una salvaguarda frente a eventuales abusos de poder o arbitrariedades por parte de la administración pública.

Dicho principio promueve la protección de los derechos ciudadanos y el respeto a los valores democráticos en todas las etapas del procedimiento administrativo, el 100% de los encuestados estuvo de acuerdo, sin respuestas negativas ni manifestaciones de desconocimiento. Este consenso pone de relieve el valor ético-jurídico del principio de juridicidad como eje rector de una gestión pública respetuosa de los derechos humanos, la transparencia y la participación democrática (Cano, 2020).

Respecto a si el respeto a los valores democráticos forma parte del alcance del principio de juridicidad, el 90% respondió afirmativamente, el 10% negativamente y ningún encuestado manifestó desconocimiento. Este dato refuerza la idea de que la juridicidad no solo implica obediencia al marco legal, sino también la incorporación de principios fundamentales como la igualdad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la vida institucional (Ponce & Macías, (2022).

El debate sobre la modernización legislativa y su efecto en la administración pública ha cobrado especial relevancia en los últimos años, donde la innovación normativa de manera explícita puede fortalecer la aplicación del principio de juridicidad, el 90% estuvo de acuerdo, el 5% en desacuerdo

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

y el otro 5% indicó desconocimiento. Esta respuesta muestra una postura ampliamente favorable a la modernización del marco jurídico como mecanismo para mejorar la eficiencia y adaptabilidad del sistema legal (Carranza et al., 2023). Sin embargo, la presencia de opiniones divergentes resalta la importancia de que toda innovación normativa se fundamente en principios constitucionales y sea acompañada por procesos de socialización y capacitación adecuados.

Se evidencia la relevancia del principio de juridicidad como eje fundamental en la administración pública ecuatoriana, garantizando el respeto a la legalidad ya los derechos ciudadanos. No obstante, persisten desafíos que deben ser abordados con urgencia, como la insuficiente capacitación de los servidores públicos, la complejidad del marco normativo y la necesidad de impulsar reformas e innovaciones regulatorias que fortalezcan la eficiencia y transparencia institucional.

Conclusiones

El principio de juridicidad es un pilar esencial en la administración pública ecuatoriana, ya que garantiza que todas las decisiones y actuaciones estatales se ajusten al marco normativo vigente. Su correcta aplicación no solo protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también contribuye a la eficiencia administrativa al reducir la discrecionalidad y promover la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, en la práctica, su implementación enfrenta obstáculos que limitan su impacto en la optimización de los procesos gubernamentales.

La superposición normativa, los vacíos legales y la falta de coherencia entre diferentes disposiciones legales afectan la aplicación del principio de juridicidad en Ecuador. Estas inconsistencias pueden generar incertidumbre jurídica, ralentizar la toma de decisiones y obstaculizar la eficiencia de la administración pública. Además, la burocracia excesiva y la falta de mecanismos de control adecuados pueden fomentar prácticas administrativas ineficientes, limitando la capacidad del Estado para responder de manera ágil a las necesidades de la ciudadanía.

Uno de los principales factores que influyen en la correcta aplicación del principio de juridicidad es el nivel de formación de los funcionarios públicos. La falta de capacitación jurídica y administrativa puede generar interpretaciones erróneas de la normativa vigente y dificultar la ejecución de procedimientos de manera eficaz. Para garantizar una gestión pública eficiente y alineada con el Estado de derecho, es fundamental implementar programas de formación continua que fortalezcan las competencias jurídicas y operativas de los servidores públicos.

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

La incorporación de tecnologías en la gestión pública optimiza la aplicación del principio de juridicidad y mejora la eficiencia administrativa, reduciendo la burocracia y facilitando el acceso a la información. Es esencial reformar el marco normativo, fortalecer la supervisión y promover la capacitación de los servidores públicos para lograr una administración pública eficiente, transparente y alineada con el Estado de derecho.

Para que el principio de juridicidad mejore la eficiencia administrativa, es crucial reformar el marco normativo, eliminar contradicciones y simplificar procesos, además de fortalecer la supervisión con auditorías, participación ciudadana y estrategias éticas. Su aplicación debe trascender el cumplimiento formal de la ley, adoptando un modelo de gestión que optimice procesos mediante armonización legal, capacitación, modernización tecnológica y fortalecimiento institucional. Solo un esfuerzo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y los profesionales del derecho garantizará una administración pública eficiente, transparente y alineada con los principios democrático.

Referencias

1. Aguinaca, C. (2019). Efectividad de la aplicación de los principios constitucionales de la administración pública en la contratación pública. [Trabajo de grado, Universidad Nacional de Loja]. Repositorio de la Universidad Nacional de Loja. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/22324/1/Cinthyafernanda%20Aguinaca%20Satama.pdf>
2. Aponte, J. (2022). Crisis del principio de legalidad: discusión recurrente pero necesaria en América Latina. *Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos*, 1(14), 95-111. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-92452022000100095
3. Cano, T. (2020). La presunción de validez de los actos administrativos. *Revista De Estudios De La Administración Local Y Autónoma*, (14), 6-28. <https://doi.org/10.24965/reala.i14.10851>
4. Carranza, J., Segura, V., & Defas, V. (2023). La inteligencia artificial en los procesos de administración pública: Artificial intelligence in public administration processes. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(6), 1485 – 1495. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i6.1541>
5. Código Orgánico Administrativo. (2017) (1ª ed.). Registro Oficial. Quito, Ecuador. <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/COA.pdf>

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

6. Constitución de la República del Ecuador [CRE]. Art. 226. 20 de octubre de 2008. (Ecuador)
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
7. Cuenca, S. (2021). Buena Administración y procedimiento administrativo en el Ecuador. *Revista Ruptura*, (02), 283-301. <https://doi.org/10.26807/rr.vi02.56>
8. De la Torre., & Núñez, S. (2023). Transparencia en la administración pública municipal del Ecuador. *Estudios De La Gestión: Revista Internacional De Administración*, (14), 53–73. <https://doi.org/10.32719/25506641.2023.14.3>
9. Haro, M., & Villacrés, P. (2021). Los principios del Derecho Administrativo: su positivización. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 61–75. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.114>
10. Kelsen, H. (1960). *Teoría Pura del Derecho*. Eudeba. <https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/libro-teoria-pura-del-derecho-hans-kelsen.pdf>
11. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley n.º 40/2015 (2015, 2 de octubre) (España). *Boletín Oficial del Estado*, (236). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>
12. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica (2023, 7 de febrero) (Ecuador). [LOTAIP]. *Registro Oficial*, (245). https://app.lexis.com.ec/sistema/visualizador-norma/PUBLICO-LEY_ORGANICA_DE_TRANSPARENCIA_Y_ACCESO_A_LA_INFORMACION_PUBLICA
13. Ley Orgánica de Servicio Público, (2010) [LOSEP]. (Ecuador). Art. 71, Art. 25. <https://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/4070/4/Ley%20Orgánica%20del%20Servicio%20Público.%20Actualizado.pdf>
14. Morales, I., Morillo, J., & Tobar, L. (2020). Gobierno digital en América Latina: Un reto de la gestión pública de América Latina. *Revista Científica: Investigación y Desarrollo*, 1(2), 32-41. <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/RevFIG/article/view/2467/3562>
15. Pérez, V., & Tamayo, J. (2022). Derecho a la buena administración pública, referente de eficacia y eficiencia en la actividad administrativa. *Revista Eruditus*, 3(3), 43-60. <https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/re/article/view/716/698>

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

16. Pomaquero, J., Segura, J., Bonifaz, L., & Robalino, G. (2023). Innovación en la gestión pública y open government. *Polo del Conocimiento*, 8(9), 1219-1233. <https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6078>
17. Ponce, F. & Macías, J. (2022). El principio de juridicidad como garantía del procedimiento administrativo disciplinario. Universidad San Gregorio de Portoviejo. <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/2570/1/2022-MDER-091.pdf>
18. Redrobán, W (2021). Los Principios del Estado Constitucional de Derechos y Justicia en el procedimiento legislativo en Ecuador. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 226–239. <https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/131>
19. Reyna, M. (2023). Aplicación del principio de juridicidad dentro de los procedimientos administrativos. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(4), 1026– 1034. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i4.1281>
20. Reyna, M. (2023). Aplicación del principio de juridicidad dentro de los procedimientos administrativos: Application of the principle of legality within administrative procedures. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(4), 1026– 1034. <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1281>
21. Rivero, R., & Granda, V. (2017). Derecho administrativo. Quito: Corporación Editora Nacional procedimiento legislativo en el Ecuador. *Sociedad y Tecnología*, 4(51), 226-239. <https://www.uasb.edu.ec/publicacion/derecho-administrativo/>
22. Silva-Conde, D., Fuentes-Gavilanez, M., Valencia-Murillo, E., & Valdiviezo, A. (2024). Análisis crítico: el principio de legalidad y juridicidad en el proceso administrativo. *Estudios Y Perspectivas Revista Científica Y Académica*, 4(1), 328-349. <https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/view/102>
23. Subía, J., & Mantilla, M. (2020). Cambios en la Administración Pública y su Impacto en el Sistema de Control en el Ecuador. *Economía Y Negocios*, 11(1), 73–92. <https://www.redalyc.org/pdf/6955/695578708008.pdf>
24. Valencia, S., & Cadena, N. (2025). Principios Jurídicos de la Administración Pública y el Incumplimiento por Parte de los Servidores Públicos de Ecuador. *Revista Científica De Salud y Desarrollo Humano*, 6(1), 530–541. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i1.494>
25. Valle, E. (2023). La buena administración pública como derecho de los ciudadanos y la eficacia del Código Orgánico Administrativo [Trabajo de grado, Universidad Nacional de

El principio de juridicidad y su impacto en la eficiencia de la administración pública: Un análisis jurídico de la normativa Ecuatoriana

- Chimborazo]. Repositorio de la Universidad Nacional de Chimborazo. [http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/10817/1/Valle%20Melena,%20E.%20\(2023\)%20La%20buena%20administración%20pública%20como%20derecho%20de%20los%20ciudadanos%20y%20la%20eficacia%20del%20COA.pdf](http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/10817/1/Valle%20Melena,%20E.%20(2023)%20La%20buena%20administración%20pública%20como%20derecho%20de%20los%20ciudadanos%20y%20la%20eficacia%20del%20COA.pdf)
26. Velaña, B. (2019). La afectación del derecho al trabajo de los servidores públicos ocasionado por los contratos ocasionales en el Ecuador. *Boletín De Coyuntura*, (22), 20–23. <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/720>
27. Villalva, L., & Becerril, O. (2023). Desafíos actuales para el acceso y participación de las mujeres en la administración pública: El caso de una institución mexicana. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(4), 319–333. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i4.1218>

©2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).